

lencia de su territorio o impedido para ejercer en él su jurisdicción pueda «ejercerla fuera

buscarla en la distinción, hoy superada en sus principales consecuencias prácticas, entre de-



Provided by Dadun, University of Navarra

[Metadata, citation and similar papers at core.](#)

P. HUIZING, *Delitto e pena nella Chiesa*, Concilium 8 (1967) 19-146; A. MARZOA, *sub c. 1311*, en ComEx, IV/1, <sup>2</sup>1997, 247-252; Z. SUCHECKI, *I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*, Città del Vaticano 1999; V. DE PAOLIS, *La potestà coattiva nella Chiesa*, Quaderni di diritto ecclesiale (1999) 133-158; IDEM, *La dimensione giuridica delle pene nella Chiesa*, en C. J. ERRÁZURIZ M.-L. NAVARRO (eds.), *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 212-265.

Fabio FRANCESCHI

## \*COADJUTOR

Vid. OBISPO COADJUTOR; VICARIO PARROQUIAL

## COADYUVANTE EN EL RECURSO

Vid. también: DERECHO SUBJETIVO; INTERÉS LEGÍTIMO; INTERVENCIÓN DE TERCERO; LITISCONSORCIO; PARTES PROCESALES; PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Puede llamarse coadyuvante al tercero que interviene en un recurso contencioso-administrativo, no como parte (procesal) autónoma, sino adhiriéndose a una de las partes, porque tiene interés en que prospere la pretensión que esta sostiene.

El coadyuvante se caracteriza, pues, porque su pretensión no es directamente planteada en el proceso: este se refiere a un conflicto ajeno cuya resolución puede afectar, o afecta, en mayor o menor medida a una situación jurídica suya. Por esa razón interviene para *coadyuvar*, para auxiliar, a la pretensión de la parte (no para suscitar un proceso distinto que verse directamente sobre la suya propia). La figura del coadyuvante se ha explicado expresivamente (cf COUTURE 220), diciendo que es alguien que tiene «un interés jurídico propio en un conflicto ajeno», pero de tal manera que la defensa de ese interés propio le lleva a «defender el interés ajeno» en el litigio.

Esta figura estaba expresamente prevista –aunque con carácter más restrictivo que otras soluciones de derecho comparado y referida solo a la parte resistente– en el derecho administrativo español. Su razón de ser hay que

cesal ha desaparecido de la legislación española, fundamentalmente porque se trataba de una figura no autónoma, sino completamente supeditada a la parte a la que se unía, de manera que debía seguir en todo su actitud procesal, y no podía continuar el proceso por su cuenta o interponer recurso contra la sentencia en caso de allanamiento o ausencia de recurso de la parte. El deseo de ampliar la tutela judicial efectiva, ofreciéndola cuando se defiende tanto un derecho subjetivo como un interés legítimo, ha llevado a permitir la intervención más amplia de terceros conforme a las reglas que se aplican en caso de *litisconsorcio*, activo o pasivo.

En derecho canónico se ha permitido desde el principio la intervención de terceros en el contencioso-administrativo, con una concepción genérica. Las primeras *Normae speciales* del STSA, en efecto, preveían la intervención de «alii quorum interest se opponere», «omnes quorum ex adverso interest» (art. 112); «quibus ex adverso interesse habens» (art. 113); etc. A pesar de esta amplitud –mayor que la permitida entonces por el derecho español–, el hecho de tratarse de intervención de terceros en el proceso contencioso-administrativo justificaba el uso de este nombre de *coadyuvante* en la doctrina canónica.

Actualmente la *Lex propria* del STSA, de 21.VI.2008, contiene expresiones como «Secretarius omnes quorum interest ad litis contestationem convocat» (art. 43) o, ya en las normas específicas del contencioso-administrativo, «§ 1. Secretarius, suo decreto, 1º) iubet notificari competenti dicasterio omnibusque legitime coram dicasterio intervenientibus recursum receptum [...] § 2. Congrua congruis referendo, secretarius eodem modo procedit cum aliis interesse forte habentibus» (art. 79).

Pero, al margen de esas locuciones, en virtud del art. 122, que remite a la normativa del CIC de 1983 las cuestiones no tratadas explícitamente en la *Lex propria*, esta cuestión se regirá por lo dispuesto en los cc. 1596-1597 del CIC, que prevén también la intervención de tercero en un proceso «accesoriamente, para ayudar a uno de los litigantes» (c. 1596 § 1), que es la propia del coadyuvante, una vez

haya sido resuelta favorablemente la cuestión sobre su derecho a intervenir (c. 1596 § 2).

### Bibliografía

BENEDICTO XVI, M.P. *Antiqua ordinatione, quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae «lex propria» promulgatur*, 21.VI.2008, en AAS 100 (2008) 513-538; E. J. COUTURE, *Legitimación procesal del tercero coadyuvante*, en *Estudios de derecho procesal civil*, III, Buenos Aires 1950; E. LABANDEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona 2<sup>a</sup> 1993.

Jorge MIRAS

## CODEX

Vid. también: «CODEX APIARII CAUSAE»; «CODEX CANONUM ECCLESIAE ORIENTALIIUM»; «CODEX IURIS CANONICI (1917)»; «CODEX IURIS CANONICI (1983)»; «CODEX THEODOSIANUS»

Este término, que se puede usar en el ámbito de diversas disciplinas con múltiples sentidos, indica, habitualmente en el terreno jurídico, un tipo de fuentes jurídicas de distinta procedencia y naturaleza que posteriormente se reúnen según diversas modalidades. En el derecho secular, el término –que entró oficialmente en la historia con el *Codex Gregorianus* y el *Codex Hermogenianus* (a finales del siglo III d.C.) para indicar la colección privada de leyes imperiales– fue empleado también en el bajo imperio para designar tres colecciones auténticas: el *Codex Theodosianus* (438), el *Novus Codex* (528) y el *Codex repetitae praelectiones* (534) de Justiniano. Solo aparece de nuevo a partir del siglo XVII, en Francia y en Italia, si bien de forma esporádica; más tarde, desde el siglo XVIII en adelante, se usa con frecuencia.

En el período precedente, se utilizaban también con frecuencia otros dos términos para designar las diferentes recopilaciones de normas: la *compilación*, que reunía textos promulgados con anterioridad y los disponía según un orden cronológico o metódico; y la *colección*, que presentaba textos escogidos y dispuestos de modo orgánico (GAUDEMET 3-4, 15). Un proceso análogo se dio en el derecho canónico, donde, a decir verdad, el término *Codex* aparece sólo en la época moderna. La denominación de *Codex* que se dio a algunas colecciones de cánones conciliares o de decretales de los primeros siglos cristianos o del período alto medieval es, en realidad, muy posterior.

Vale la pena recordar que fue en 1615 cuando Chr. Justel publicó en París, con el título in-

exacto y pretencioso de *Codex canonum Ecclesiae Africanae*, una colección de concilios africanos tomados de Dionisio el Exiguo; y que no fue hasta 1675 cuando P. Quesnell, con el mismo énfasis, llamó *Codex Ecclesiae Romanae* a una antigua colección de cánones de concilios, de decretales papales, de cartas de León Magno y de textos teológicos.

Desde entonces no faltan testimonios sobre el empleo del término también en las recopilaciones canónicas de las demás Iglesias cristianas: basta pensar, por ejemplo, en el *Codex juris ecclesiastici Anglicani or the Statutes, Constitutions, Canons, Rubrics and Articles of the Church of England...* de E. Gibson (Londres 1713); o también en dos obras de canonistas católicos sobre personas o materias concretas: G. Fontanini, *Codex Constitutionum quas Summi Pontifices ediderunt in solemnibus canonizatione Sanctorum a Johanne XV. ad Benedictum XIII. sive ab A.D. 993. ad A.D. 1729...*, Romae 1729; *Code des Curés, ou Nouveau Recueil des Règlements concernant les dixmes, les Portions Congruës, les Fonctions, Droits, Honneurs, Exemptions & Privileges des Curés, Vicaires perpétuels, Vicaires amovibles & autres Beneficiers, & la Jurisdiction Ecclesiastique...*, Paris 1736.

Pero lo que importa subrayar, tanto en el ámbito secular como en el sacro, es la novedad histórica, filosófica y jurídica que suponen los códigos napoleónicos y posnapoleónicos, que marcan un verdadero hito o «piedra miliar o de frontera en la historia jurídica occidental» porque presuponen un «proyecto de solución radical del problema de las fuentes del derecho» (GROSSI 136-137) y sustituyen el anterior pluralismo con un riguroso monismo jurídico. El Código pío benedictino de 1917, a pesar de que presenta algunas diferencias respecto a los códigos civiles, refleja ciertamente la misma idea de unificación, de sistematización y de centralización del derecho secular codificado. Hay buenas razones para sostener que el recurso al método de la codificación en el derecho de la Iglesia supone una ruptura metodológica con el *ius vetus*, a pesar de que la doctrina canónica predominante ha insistido hasta ahora en la continuidad histórico-normativa (FANTAPPIÈ, *passim*).

### Bibliografía

F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, (trad. it.), Firenze 1968; J. GAUDEMET, *Codes, collections, compilations. Les leçons de l'histoire. De Grégorius à Jean Chappuis*, Droits 24 (1996) 3-16;